



Instituto de Acceso  
a la Información  
Pública

NUE 59-A-2020 (LS)

contra Universidad de El Salvador (UES)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

**1. Descripción del caso:**

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] [REDACTED] **Joya**, en adelante el apelante, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Universidad de El Salvador (UES)**, respecto de la siguiente información: "1. Tipos o modalidades de contratación de personal utilizados en la Facultad de Ciencias Económicas; 2. Listados de personas contratadas para cada tipo de contratos en la Facultad de Ciencias Económicas...".

En la resolución recurrida, dentro del expediente con referencia 36-2020, la oficial de información de la **UES** resolvió: "Proporcionar respuesta a la solicitud de información anteriormente descrita: que se detalla a continuación: 1. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas recibida con fecha 24 de febrero de 2020, mediante la cual expresa que la información solicitada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica (sic) <http://transparencia.fce.ues.edu.sv/>."

En tal sentido, [REDACTED] [REDACTED] expresó su inconformidad al considerar que la respuesta emitida por el Lic. Nixon Rogelio Hernández no era clara, pues el sitio web <http://transparencia.fce.ues.edu.sv/> al que se le reorientó, no es un sitio concreto donde de forma inequívoca e inteligible se pueda acceder a la información que se solicitó.

El Instituto admitió la apelación y designó a la comisionada en funciones Daniella Huevo Santos, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Sin embargo, en virtud del nombramiento de los nuevos Comisionados (propietario y suplente) del sector de periodistas, mediante auto de señalamiento de audiencia pronunciado a las catorce horas con treinta y siete minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, el caso se reasignó al entonces Comisionado Propietario **Luis Javier Suárez Magaña**.



Durante la etapa de instrucción, la UES rindió su informe de defensa, suscrito por Roger Armando Rivas Arias, actuando en su calidad de Rector y representante legal de dicho ente, estableciendo en lo medular: que el 8 de julio de 2020, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, Licenciado Nixon Rogel Hernández Vásquez, le remitió un informe en el que expresó que ante la solicitud de información con referencia UAIP/36.1/2020, él oportunamente informó a la oficial de información de la UES, que: *“...mediante nota con fecha veinticuatro de febrero del presente año, se le comunica a la Oficial de Información que lo solicitado por el peticionario se encuentra en el portal de transparencia de la Facultad de Ciencias económicas brindando asimismo la dirección del sitio web mediante el cual se puede ingresar: [transparencia.fce.eus.edu.sv](http://transparencia.fce.eus.edu.sv), ya que todos los diferentes acuerdos de contratación en los cuales se encuentra definido el tipo de contratación y el detalle de la persona contratada, tanto del personal docente, personal administrativo y personal de servicios generales se encuentran disponibles en el referido portal.”*

En tal sentido, el representante legal del ente obligado establece que de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (LOUES) y el artículo 34 y 37 del Reglamento de Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (RELOUES), el Decano es el máximo funcionario ejecutivo de la facultad quien la representa, dirige y preside. Por lo que manifiesta *“Es así que a pesar de ser el Rector el máximo funcionario ejecutivo de la Universidad, la dirección, representación y adopción de medidas ejecutivas en las facultades no se encuentran bajo mi dirección funcional. Por tanto como Rector no estoy facultado para declarar la inexistencia o reserva de información generada por las Facultades que integran la UES, ni para desclasificar aquella información que ha sido declarada reservada por las Juntas Directivas de las Facultades.”*

Por otra parte, el ente obligado a través del mismo informe justificativo ofreció los medios probatorios documentales y testimoniales, consistentes en: a) **documental**: Informe de fecha 08 de julio de 2020, suscrito por el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador Licenciado Nixon Rogelio Hernández Vásquez; b) **testimonial**: Licenciado Nixon Rogelio Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, sin hacer la determinación de utilidad y pertinencia de la prueba, conforme a lo establecido en el art. 317 del Código procesal civil y mercantil (CPCM).

La audiencia oral del presente caso se realizó de manera virtual, por medio de la plataforma “Meet” de Google, únicamente con la comparecencia de la parte apelante, [REDACTED] [REDACTED]

■; no así la representación del ente obligado, pese a haber sido debidamente notificado para su realización.

En cuanto al ofrecimiento probatorio, el apelante remitió correo electrónico por los canales establecidos por este Instituto, con el cual pretende ilustrar el contenido del sitio web donde se le redireccionó por parte de la oficial de información de la UES, en el cual no se encuentra la información requerida en este procedimiento. Por su parte, el ente obligado había ofrecido como prueba, por medio del informe de ley, lo siguiente: **a) documental:** Informe de fecha 08 de julio de 2020, suscrito por el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador Licenciado Nixon Rogelio Hernández Vásquez; **b) testimonial:** Licenciado Nixon Rogelio Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, sin haberse delimitado la utilidad y pertinencia de la prueba, conforme a lo establecido en el art. 317 del Código procesal civil y mercantil (CPCM), siendo la audiencia oral el último momento procesal oportuno para ofrecer prueba.

Acto seguido, el Honorable Pleno de Comisionados y Comisionadas -de forma unánime- admitió la prueba documental ofrecida por ambas partes por considerar su pertinencia y utilidad en el objeto del presente procedimiento. En cuanto a la prueba testimonial ofrecida por el ente obligado en su informe justificativo, fue rechazada por no haberse realizado determinación de utilidad y pertinencia de la misma.

A continuación en el desfile probatorio, el ciudadano apelante presentó el video en el que aparece la plataforma a la que se le redirecciono que se encontraba la información de la información, es decir, en el portal de transparencia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, advirtiendo que efectivamente no se tiene acceso ni a la modalidad de contratación ni al nombre del empleado público que ejerce ese cargo. Afirmando que dicho portal no tiene ni un manual de uso y tampoco es amigable con el usuario. Que en el buscador colocó “modalidades de contratación” y no aparece respuesta a lo solicitado, existiendo un problemas de diseño, y con conocimiento de causa del decano de la facultad, considerando que este es el tercer caso puesto a conocimiento del IAIP.

Seguidamente, en la fase de alegatos realizada en la Audiencia Oral, el apelante manifestó inicialmente que reitera su postura respecto a que la información solicitada es de carácter público según la LAIP; que considera exista una manifiesta limitación a su Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) ya que lo redirigen a la página web que cláramente no se le permite acceder a lo peticionado, por lo que considera que dicha situación debe ser corregido por la facultad, por haber conocimiento de causa del ente obligado y tratarse de una conducta recurrente presentada



por el ente obligado. Por otra parte, ██████████ ██████ manifestó que a su criterio no se trata de falta de pericia o conocimiento por parte del ente, al ser el mismo una casa de educación superior que forma a personas en carreras que incluyen en su currícula gestión documental, archivo, así como tecnologías de la comunicación e información; de igual manera hace énfasis en que no considera que sea una cuestión de falta de recursos, ya que el se ha establecido que las alcaldías que tengan un presupuesto mayor a dos millones de dólares cuenten con un sitio con una serie de características, y que la facultad tiene un presupuesto que ronda los cinco millones de dólares.

El apelante finalizó sus alegatos pidiendo que se le restituya el derecho de acceso a la información que indirectamente se le ha denegado, que se ordene el acceso a la información requerida y para evitar la indeterminación del periodo temporal de la información, que se considere lo requerido para el periodo comprendido por los años 2019 y 2020.

## **2. Análisis del caso:**

(I) Naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito, haciendo algunas acotaciones en particular sobre el requerimiento del “Listado de personas”, conforme a jurisprudencia emitida por la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo; (II) Determinación del cumplimiento de los principios de disponibilidad e integridad, respecto a la documentación entregada por parte de la UES; y, (III) Aplicación al presente procedimiento.

I. En primer lugar, es dable establecer que el quehacer de un funcionario o empleado público en el ejercicio de sus facultades, en principio es información pública, pues la misma promueve la rendición de cuentas y contraloría social. Ahora bien, lo correspondiente a tipos de contratos, salarios, dietas o emolumentos, al ser sufragados —en general— con fondos públicos, habilita la posibilidad de una fiscalización, en cuanto a conocer el modo de contratación, el monto recibido, los aumentos o modificaciones realizadas, el trámite administrativo para acreditar tales aumentos o documentación que respalde los mismos.

Lo anterior es importante, considerando que el primer requerimiento de información del objeto de controversia del presente caso, corresponde a tipos o modalidades de contratación de personal utilizados en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, lo cual ciertamente constituye información pública, al no haberse alegado por parte del ente obligado ninguna razón que justifique la reserva de dicha información.

Aunado a ello, se debe considerar la aplicación del principio de máxima publicidad en el presente caso, frente a la información que administra o se encuentra en poder de la UES, de acuerdo



a los tres efectos de dicho principio<sup>1</sup>, que son : a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción<sup>2</sup>; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada<sup>3</sup>; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación<sup>4</sup>.

Por lo anterior, se tienen elementos para establecer que el modo de contratación de un empleado o funcionario público es información pública, lo cual incluso no ha sido objetado por el ente obligado.

Por otra parte, lo referente al *listados de personas contratadas para cada tipo de contratos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador*, es importante advertir que tal como se ha afirmado previamente, la naturaleza de información en poder de entidades estatales es por regla general pública salvo que concurra una causa legalmente justificada que impida que ésta sea proporcionada a los ciudadanos; es decir, el referido principio reconoce que el DAIP puede tener límites bajo el cumplimiento de tal premisa.

En ese mismo sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha establecido que la mera presencia de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico trae consigo que muchas leyes incidan sobre ellos, regulando su ejercicio o restringiendo su contenido en distintos supuestos. Así, los derechos fundamentales son a la vez límite frente a la ley y objeto de regulación de la misma. Claro ejemplo de ello es la idea que el legislador es una garantía de los mismos a través de la reserva de ley y la determinación normativa<sup>5</sup>.

De ese modo, los límites a los derechos fundamentales se encuentran establecidos por el legislador en la ley que regula el ejercicio del derecho o una ley en sentido formal. Para el caso, del DAIP, la LAIP regula algunos límites al derecho, en tanto el legislador clasificó la información en poder del Estado de la manera siguiente: información pública, pública oficiosa, información reservada e información confidencial, constituyendo las últimas dos clasificaciones excepciones al DAIP: la primera de ellas, con carácter temporal, y la segunda perpetua, de manera excluyente. Es decir, debe entenderse que la información confidencial es una exclusión directa de la información pública; contrario es el caso de la información reservada que, sin dejar de ser pública, la restricción

<sup>1</sup> El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

<sup>2</sup> Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición, 2012.

<sup>3</sup> Ídem

<sup>4</sup> Ídem

<sup>5</sup> Sentencia Definitiva de Inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional el día 12 de abril de 2007, en el proceso de referencia 28-2006/33-2006/34-2006/36-2006.



a su divulgación es temporal, entendiéndose que eventualmente será de conocimiento general, a diferencia de la información confidencial.

Entonces, sobre el objeto de apelación, ya ha existido pronunciamientos previos por parte de este Instituto, de tal manera que se ha logrado configurar un criterio que sostiene que el nombre de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, es información pública; dicho de otro modo, cuando una persona solicita información relativa al nombre de funcionarios o servidores públicos se tiene que entregar la información sin restricción alguna<sup>6</sup>.

Asimismo, se ha establecido que el ente obligado tiene el deber de resguardar los datos personales cuando se trata de nombres, como regla general, de personas que no son servidoras públicas o cuando existan situaciones que se enmarquen en alguna causal del art. 19 o 24 de la LAIP, debiendo fundamentar conforme a los parámetros establecidos en la ley antes referida.

El anterior criterio encontraba su fundamento en la ponderación del DAIP como derecho fundamental, pues conocer dicha información favorece la controlaría ciudadana y facilita verificar que los servidores públicos realizan sus funciones públicas de forma eficiente, eficaz y con apego a lo establecido en la ley, en tanto, si bien el nombre de los servidores constituye un dato personal que le pertenece, su publicidad no afecta la esfera íntima del individuo, sino por el contrario, contribuye a garantizar el DAIP de la forma indicada.

Ahora bien, lo anterior no obsta a que el pronunciamiento planteado sea inapelable o inamovible; es decir, que no sufra modificaciones derivadas del control posterior al que pueden ser sometidas las resoluciones emitidas por entes de naturaleza administrativa, o, mediante mecanismos reconocidos por la jurisprudencia constitucional como válidos para que los Tribunales fundamenten el cambio de un precedente, como: (i) estar en presencia de un precepto normativo cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; (ii) el cambio de conformación subjetiva del Tribunal y (iii) que los fundamentos fácticos que le motivaron hayan variado sustancialmente al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario con la realidad normada<sup>7</sup>.

No obstante lo anterior, para el presente no se ahondará en los supuestos reconocidos para el cambio de criterio puesto que, la interpretación desigual de la norma -LAIP- en el presente no tiene su origen de sustento en este Pleno, sino que deriva del control de legalidad al que se encuentran

---

<sup>6</sup> Resolución definitiva del procedimiento de apelación ref. 128-A-2014, del 19 de noviembre de 2014

<sup>7</sup> Sentencia de Amparo emitida por la Sala de lo Constitucional el día 14 de febrero de 2018, en el proceso de referencia 74-2016.

subordinados los actos administrativos dictados por este Instituto; que para este caso, responde a la decisión adoptada por el máximo tribunal en la materia, es decir, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.

Enunciado lo anterior, para dilucidar la controversia se aclara que se este Instituto hará uso del pronunciamiento emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo (en adelante SCA) - como máximo intérprete en materia contencioso administrativa- en la resolución marcada con la referencia 21-20-RA-SCA, dictada a las once horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en donde la referida autoridad sobre el objeto de la controversia en este procedimiento determinó:

*“[...] el carácter de servidor público de los empleados de la FGR, no es motivo suficiente para excluir la protección de sus datos personales puesto que tal, como se desarrollará en el siguiente apartado, los empleados públicos, a diferencia de los funcionarios, no poseen una facultad decisoria ni directiva dentro de la institución pública que justifique la divulgación pública de sus datos personales.*

*Esto no quiere decir que nunca se podrá acceder y entregar los datos personales de los empleados públicos; al contrario, según la misma LAIP, su divulgación es procedente **con el consentimiento libre y expreso del titular, o bien sin el consentimiento del mismo, procede su entrega en el caso y formato prescrito en el art. 34 de la LAIP [...]**”* (Las negritas son nuestras).

Aunado a lo anterior, con la finalidad de esclarecer el razonamiento citado, la referida Sala también retomó la diferencia entre empleado público y funcionario abordada en la sentencia emitida a las once horas con cuarenta y nueve minutos del trece de marzo de dos mil veinte, en el proceso de apelación con referencia: 1-20-RA-SCA de la manera siguiente:

*“El funcionario se define por expresar voluntad del Estado, de ahí que sea representativo de este y ostenta poder de decisión frente a los particulares [...].*

*Por su parte, los empleados públicos, carecen de poder de decisión, estos se perfilan como meros ejecutores de instrucciones, por ello, las expresiones que efectúen no forman parte de la voluntad o representación del Estado [...].*

*En específico, sobre los funcionarios públicos la LAIP ha determinado que es información pública de divulgación oficiosa relativa al directorio y currículo de los funcionarios públicos incluyendo su correo electrónico institucional.*



*Por tanto, en virtud del poder de decisión y su principal trascendencia en las actuaciones estatales, si se justifica que el derecho a la protección de datos personales frente al del interés público de conocer tal información”.*

Sobre la base de tal premisa, la Sala concluyó que la información relativa a los nombres y demás información concerniente a los empleados públicos aun y cuando sus labores de colaboración tienen una incidencia en el ejercicio de la función pública, las mismas siempre se encuentran supeditadas a la decisión final y exclusiva de los funcionarios, por lo que, dicha circunstancia no denota una razón suficiente para vulnerar el derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos.

De ese modo, reiteró que dichos datos podrán ser conocidos por los particulares siempre y cuando exista consentimiento de los titulares de los datos-servidores públicos- o en los casos contemplados en el art. 34 de la LAIP.

En ese orden, con la intención de contar con claridad de lo resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo, este Instituto interpuso solicitud de aclaración sobre algunos puntos de la sentencia antes citada, específicamente sobre la interpretación de la referente a la publicidad de los nombres de los servidores públicos, indicando lo siguiente:

*“[...] Los nombres de los servidores públicos son datos personales y por ende, información confidencial.*

*[...] La difusión o entrega de información pública que guarde relación en el ejercicio de las funciones de los empleados públicos dentro de la institución, no implica que deben compartirse el nombre y otros datos personales de los referidos empleados”<sup>8</sup>*

La interpretación aludida deviene del derecho a la protección de datos personales, categoría que goza de una especial protección en nuestro ordenamiento jurídico.

En consecuencia, este Instituto como ente garante del DAIP y del Derecho a la Protección de Datos Personales (DPD), pero sobre todo de la legalidad de sus actos sujetos a control jurisdiccional conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Constitución de la República, para el caso, a través de la jurisdicción contencioso administrativa (art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), considera oportuno adoptar la interpretación emitida por la referida Sala, pues

---

<sup>8</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, solicitud de aclaración dictada a las trece horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, en el proceso con referencia: 21-20-RA-SCA.



resultaría contradictorio, antojadizo y arbitrario emitir fallos alejados del criterio de la máxima intérprete en materia administrativa.

Al tenor de lo anterior, siendo respetuosos de la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, respecto del requerimiento de información "... *listados de personas contratadas para cada tipo de contratos en la Facultad de Ciencias Económicas...* ", es procedente modificar la resolución de la oficial de información de la UES, y ordenar la entrega de la información solicitada por el apelante, de conformidad a los términos antes expuestos en la presente providencia.

II. Respecto del informe de defensa presentado por la UES, este es tendiente a afirmar que no existe transgresión al derecho de información al haberse indicado a la parte apelante el lugar donde se encuentra la información requerida, que para el caso, se indicó que está en el portal de transparencia del ente obligado, lo cual se pretende probar con el informe suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, Licenciado Nixon Rogel Hernández Vásquez, en el que expresó que ante la solicitud de información con referencia UAIP/36.1/2020, él oportunamente informó a la oficial de información de la UES, que: "... *mediante nota con fecha veinticuatro de febrero del presente año, se le comunica a la Oficial de Información que lo solicitado por el peticionario se encuentra en el portal de transparencia de la Facultad de Ciencias económicas brindando, asimismo la dirección del sitio web mediante el cual se puede ingresar: [transparencia.fce.ues.edu.sv](http://transparencia.fce.ues.edu.sv), ya que todos los diferentes acuerdos de contratación en los cuales se encuentra definido el tipo de contratación y el detalle de la persona contratada, tanto del personal docente, personal administrativo y personal de servicios generales se encuentran disponibles en el referido portal*".

El análisis del citado informe, en su carácter de prueba documental, se debe analizar de conformidad al contenido de los artículos 341 y 416 del CPCM en relación al artículo 106 de la LPA, que establecen, de forma categórica, el valor probatorio que merecen los medios probatorios consisten en documentos públicos y privados, que consten en el procedimiento. Siendo el caso de los documentos públicos y privados que **constituyen prueba fehaciente de los hechos, siempre y cuando su contenido no haya sido controvertido**. Se toma en cuenta, además, que todos los demás medios de prueba ameritan que sean valorados como prueba plena.

Al tenor de lo anterior, se cuenta con la prueba aportada por el apelante, por medio del video proyectado en audiencia del sitio web al que se le redireccionó, quedando establecido que si bien es cierto, en dicho portal web existe una pantalla que pretende contener la información requerida por el ciudadano [REDACTED] Joya, la misma no estaba a disposición del público, pues al solicitar el acceso no se desplegaba la documentación deseada; lo cual, permite advertir que para



garantizar el derecho de acceso a la información pública, no basta únicamente con indicar el lugar donde se “podría” encontrar la información, sino más bien se debe garantizar que tal redirección sea conforme al requerimiento de información realizado.

En tal sentido, la línea resolutive de este Instituto ha establecido que: “...A la luz de los principios de la LAIP, la información pública debe brindarse al solicitante de manera pronta, oportuna, completa, fidedigna y veraz, mediante procedimientos simples y expeditos. Todo ello, en atención a la necesaria rendición de cuentas sobre el uso y administración de los bienes públicos que tienen a su cargo. Es decir, que la información debe ser entregada, de manera íntegra, completa o sin adolecer de alguna de sus partes...” (Resolución Definitiva emitida a las diez horas con treinta y ocho minutos del día once de diciembre de dos mil quince, dentro del expediente con referencia NUE 119-A-2015.)

A la luz de este criterio resolutive y con la aportación probatoria de ambas partes, se puede afirmar que si bien existe un portal de transparencia de la Facultad de Ciencias Económicas y que el mismo cuenta con la posibilidad de resguardar los dos requerimientos de información realizados en este procedimiento, también se pudo establecer que el ciudadano [REDACTED], ha realizado la búsqueda de la misma, tanto de forma directa dónde debería ubicarse dicha información como en la función de “búsqueda” que contiene dicho portal de transparencia, sin tener éxito en su petición, ni sobre los tipos o modalidades de contratación de personal utilizados en la Facultad de Ciencias Económicas; y tampoco sobre el listado de personas contratadas para cada tipo de contratos en la Facultad de Ciencias Económicas, del cual como se ha desarrollado previamente, puede hacerse por medio de código institucional y/o las iniciales del nombre de dichos servidores públicos, tendiente a evitar la identificación directa de una persona física.

En tal sentido no se puede tener por garantizado el Derecho de Acceso a la Información si no se proporciona el contenido de la misma conforme a lo solicitado, incluso se pudo verificar el no cumplimiento de la entrega de información. Aunado a lo anterior, ha quedado establecido que la oficial de información de la UES ordenó la entrega de la documentación tal cual se remitió por la unidad generadora —en este caso el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas— sin realizar ninguna labor de verificaciones a fin de garantizar de forma eficaz el DAIP.

Sobre este punto, también existe antecedente resolutive por parte de este Instituto, el cual señala: “Es pertinente mencionar que conforme a lo establecido en la letra “d” del Art. 69 de la LAIP, el Oficial de Información actúa como enlace entre el solicitante y el ente obligado, por lo que al recibir una solicitud de información debe realizar las gestiones internas necesarias para

*ubicarla y proporcionarla, si fuera procedente*". (Resolución Definitiva de fecha 12 de noviembre de 2015, en el expediente con referencia NUE 8-A-2015).

III. Por tanto, en el caso de análisis, la Universidad de El Salvador, no realizó acciones suficientes para garantizar el derecho de acceso a la información pública de Pereira [REDACTED], sin contar tampoco con alguna razón suficiente para tal restricción, transgrediendo con esto el Principio de Máxima Divulgación aplicable en materia de DAIP, en el sentido que toda decisión desfavorable debe estar debidamente motivada.

En el caso en análisis, la oficial de información de la UES lejos de interpretar el art. 62 de la LAIP en su dimensión más favorable, se limitó a transferir la respuesta emitida por la Facultad de Ciencias Económicas, omitiendo la obligación de dar acceso a información pública, la cual se tendrá por cumplida cuando el acceso o indicación a dicha documentación sea en lugar cierto e inequívoco, con las medidas correspondientes para salvaguardar los datos personales de dichos empleados públicos de los que se trate, conforme a lo ordenado por la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo.

El ente obligado ha omitido cumplir lo dispuesto en el inciso final de la disposición en análisis, que señala que el cumplimiento del acceso a la información se tiene por cierto haciendo saber por escrito **la fuente, el lugar y la forma en la que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información**. En el marco de esta disposición (art. 62 de la LAIP) deberá entenderse, entonces, que el DAIP se ha perfeccionado únicamente si se corrobora la disponibilidad de la información completa.

En atención a lo cual, en aras de garantizar al ciudadano [REDACTED] su Derecho de Acceso a la Información Pública, es factible otorgar un plazo de **diez días hábiles** a la UES para que entregue la información requerida al apelante, advirtiéndole que en el caso del requerimiento dos: "*listado de personas contratadas para cada tipo de contratos en la Facultad de Ciencias Económicas*", si se trata de empleados públicos, deberán solicitar el consentimiento de éstos previo a entregar sus respectivos nombres, de lo contrario, dicho dato no podrá ser entregado. Ahora bien, en el caso de los funcionarios públicos, deberá entregarse dicho listado consignando los nombres de estos y su respectiva forma de contratación, sin necesidad de solicitar su consentimiento. Lo anterior, conforme al criterio desarrollado en el romano primero de esta resolución.

### 3. Decisión del caso:



Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 85 de la Cn., 58 letras "a", "b" y "d", 94, 96 letra "d" y 102 de la LAIP, este Instituto, resuelve:

a) Revocar la resolución emitida por la oficial de información de la Universidad de El Salvador (UES), de fecha 19 de febrero de 2020, con referencia UAIP/AA036/2020, por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) Ordenar al titular o máxima autoridad de la Universidad de El Salvador que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, gire instrucciones al funcionario competente para que se entregue a [REDACTED], lo siguiente: *1. Tipos o modalidades de contratación de personal utilizados en la Facultad de Ciencias Económicas; 2. Listados de personas contratadas para cada tipo de contratos en la Facultad de Ciencias Económicas.* En el caso del segundo requerimiento deberá entregarse conforme a lo razonado en la presente resolución, es decir, si se trata de empleados públicos, deberán solicitar el consentimiento de éstos previo a entregar sus respectivos nombres, de lo contrario, dicho dato no deberá ser entregado. Ahora bien, en el caso de los funcionarios públicos, deberá entregarse dicho listado consignando los nombres de estos y su respectiva forma de contratación, sin necesidad de solicitar su consentimiento.

c) Ordenar al titular o máxima autoridad de la Universidad de El Salvador, o a quien se designe para tal efecto, que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en esta resolución, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv).

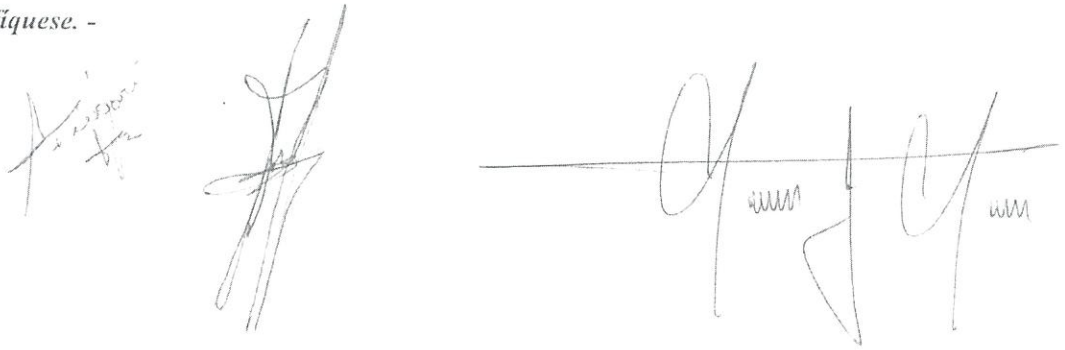
d) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

e) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo cabe el recurso de reconsideración; sin embargo, puede directamente acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa si así se considerase necesario, puesto que la vía administrativa se agota con la emisión de esta resolución. De presentar el recurso de reconsideración, este no suspende el plazo establecido en el artículo 25 literal a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo tanto



e) Publíquese esta resolución, oportunamente.

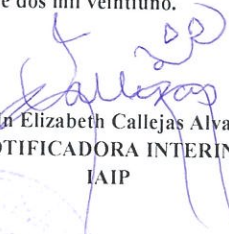
*Notifíquese. -*

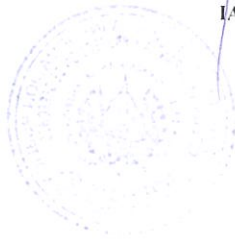


**PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**

SD/JH

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

  
Josselin Elizabeth Callejas Alvarado  
NOTIFICADORA INTERINA  
IAIP





A long, thin, diagonal line in blue ink extends from the bottom left towards the top right corner of the page, passing through the stamps.